



## **GLOBAL INVESTIGATIONS REVIEW (GIR), EDITION 2023**

Díaz Reus, con sede en Miami, tiene una fuerte presencia en América Latina, donde representa a muchas empresas y personas adineradas que se enfrentan a investigaciones estadounidenses.

### **La firma**

Díaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupción pública en América Latina, incluida la representación de un banco en una operación encubierta de la Drug Enforcement Administration. El bufete también ha representado a clientes en Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violación de sanciones.

Además de una próspera práctica en defensa de los delitos de cuello blanco, el bufete cuenta con una sólida oferta en recuperación de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo.

La práctica de investigaciones se desarrolla principalmente en la oficina de Miami y está dirigida por los socios fundadores Michael Díaz y Robert Targ.

Díaz es el socio director global del bufete y cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado privado, Díaz trabajó como ayudante del fiscal del estado en el condado de Miami-Dade entre 1986 y 1990, bajo las órdenes de Janet Reno, que más tarde se convirtió en la primera mujer fiscal general de EE.UU.

Al igual que Díaz, Targ es un experto en asesorar a clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y asuntos de cuello blanco, y también cuenta con experiencia previa en la administración pública. Fue ayudante del fiscal del distrito sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude civil y confiscación civil.

En Miami, la socia directora administrativa Marta Colomar García se centra en investigaciones gubernamentales e internas relacionadas con el blanqueo de capitales. También se ocupa de litigios comerciales internacionales.

Richard Wiedis, socio de Washington DC, trabajó durante más de una década como abogado litigante para la Sección de Fraudes, incluida la Unidad de la FCPA. Antes de incorporarse al bufete, fue vicepresidente ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy, donde supervisó sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento.

Otros nombres que hay que conocer son Marcela Blanco, especialista certificada en antiblanqueo de capitales que dirige la oficina de Bogotá, y Yamkela Makupula, director general de Díaz Reus Africa, con sede en Sudáfrica, que ha trabajado intensamente con gobiernos africanos para resolver cuestiones relacionadas con las sanciones estadounidenses.

Otros socios locales en la República Dominicana, España, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia dan a la empresa una fuerte presencia internacional.

## **Eventos recientes**

El bufete tiene una intensa actividad asesorando a muchos empresarios de alto perfil de América Latina que se enfrentan a investigaciones estadounidenses sobre blanqueo de capitales centradas en delitos como la evasión de sanciones, el soborno extranjero y el tráfico de drogas. Díaz Reus también colabora regularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y con el Departamento de Estado en nombre de empresas extranjeras que se enfrentan a espinosos problemas de sanciones estadounidenses.

Díaz Reus ha obtenido numerosos trabajos asesorando a personas implicadas en investigaciones estadounidenses sobre corrupción en la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El bufete asesoró a Edoardo Orsoni, antiguo consejero general de PDVSA, que se declaró culpable por su papel en un esquema de sobornos, según informó anteriormente GIR. En abril de 2021, Orsoni fue condenado a tres años de libertad condicional, evitando así la cárcel.

Díaz Reus también representó a Héctor Núñez Troyano, un ex funcionario de PDVSA que se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de participar en un esquema de sobornos que involucraba a la empresa de asfalto Sargeant Marine, con sede en Florida, informó GIR en 2020. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con el DOJ y acordó pagar 16,6 millones de dólares para resolver los cargos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Núñez, junto con varios otros funcionarios de PDVSA, de recibir sobornos de los ejecutivos de Sargeant Marine.

La firma representó al ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, mientras coopera con el DOJ en un caso presentado contra su sucesora, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa. La pareja fue declarada culpable en diciembre de 2022 de aceptar millones en sobornos y mover el dinero a través de Florida.

Además de asesorar a particulares en algunas de las mayores investigaciones de corrupción del Departamento de Justicia, el bufete está ayudando a gobiernos latinoamericanos afectados y a entidades estatales a recuperar activos perdidos.

Díaz Reus fue contratado por el gobierno de Juan Guaidó para localizar e incautar activos supuestamente robados al gobierno venezolano, y asegurar la restitución en casos de soborno extranjero presentados contra ex funcionarios del gobierno bajo los regímenes del difunto presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro.

El bufete fue llamado para ayudar al fondo de pensiones de la policía pública de Ecuador a recuperar el dinero perdido como consecuencia de una gran trama de corrupción que está siendo investigada tanto en Estados Unidos como en Ecuador.

## **Red**

La empresa, con sede en Miami, cuenta con 33 oficinas en los cinco continentes, incluidas cinco oficinas en Estados Unidos.

## **Clientes**

Los clientes de Díaz Reus son de todo tipo y tamaño, desde entidades estatales, como el Banco Central de Venezuela, hasta empresarios y grandes prestamistas, como el Eastern National Bank y el International Global Bank. El bufete ha asesorado a las compañías petroleras estatales de México y Venezuela. Otros clientes destacados son Alibaba y Allianz.

## **Historial**

A lo largo de los años, el bufete ha representado con éxito a varias empresas sudamericanas del sector petrolero. El bufete ayudó a una empresa venezolana a convencer a un banco estadounidense de que la empresa no había violado las sanciones de la OFAC relacionadas con Venezuela.

El bufete también representó con éxito al propietario de una empresa aurífera con sede en Colombia por cargos de blanqueo de dinero relacionados con presuntas infracciones en materia de narcotráfico y financiación del terrorismo. El bufete llevó a cabo una investigación interna que fue entregada a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas. Las autoridades se negaron a procesar a la empresa y a su propietario.